

C.A. de Temuco

Temuco, treinta de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

En sentencia de fecha 7 de febrero de 2022 dictada por don FRANCISCO MADRID ALARCÓN, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en el expediente laboral RIT 0-28-2021, RUC 21-4-0360953-3, se declaró:

I.- Que, se rechaza la excepción de incompetencia del Tribunal deducida por la demandada Municipalidad de Pucón en el escrito de contestación de la demanda, de fecha 10 de noviembre de 2021.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada Municipalidad de Pucón en el escrito de contestación de la demanda, de fecha 10 de noviembre de 2021.

III.- SE RECHAZA, en todos sus partes, la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido, y cobro de prestaciones, deducida por don BASTIAN LEONARDO CHACANO ORTEGA, ya individualizada, en contra de la MUNICIPALIDAD DE PUCÓN, representada por su alcalde Carlos Reinaldo Barra Matamala, también individualizado, conforme se expuso y analizó en esta sentencia.

IV.- Que, no se condena en costas a la demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

En contra de la sentencia, don MAURICIO ORTEGA BERRÍOS, abogado, en representación de la parte demandante don Bastián Leonardo Chacano Ortega, interpuso recurso de nulidad, basado en la causal del literal c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es: “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, como principal; y, en subsidio, la causal del artículo 477 del mismo Código, por haberse incurrido, en la dictación de la sentencia “en infracción de las leyes que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.



Desarrollando el recurso, realiza una larga exposición sobre el contenido de su demanda en la que buscaba se declarara la existencia de relación contractual laboral con la demandada, por sobre el contrato a honorarios que con ella había suscrito, dando relevancia al principio de primacía de la realidad; realiza, además, una nutrida transcripción de jurisprudencia de la Corte Suprema que avalaba su teoría del caso, pidiendo concretamente así se estableciera por el sentenciador, además, se declarara injustificado el despido y se condenara al pago de las prestaciones consecuentes, demanda que fue rechazada, por estimar el juez que su vínculo se desarrolló en el marco legal que establece para el caso el artículo 4 de la ley 18.883.

Fundando la primera causal expone que en su sentencia el Juez reconoció la existencia de una serie de indicios, los que refiere, que debieron haberlo llevado a concluir la existencia de una relación laboral, es decir, de que en el caso de marras existía una relación de subordinación y dependencia entre su representado y la demandada, no obstante decidió calificar la relación como un contrato a honorarios dentro de la hipótesis del artículo 4° del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, lo que constituye una errada calificación jurídica de los hechos, dejando de aplicar los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo, como si ha sido interpretados por la Excma. Corte Suprema, en reiterados fallos de manera uniforme, que transcribe. Añade que lo anterior influye en lo dispositivo del fallo pues si el Tribunal a quo hubiera aplicado en su debido contexto el artículo 1° del Código del Trabajo, y teniendo presente los antecedentes de autos, habría tenido necesariamente que concluir que a este caso le es posible aplicar la normativa del Código del Trabajo y habría accedido a la demanda. Por ello, pide concretamente recalificar jurídicamente los hechos, estableciendo la relación contractual laboral, y acceder a la demanda, en todas sus partes, con costas.

En relación a la causal subsidiaria, sustentada en los mismo argumentos fácticos, señala infringidos los artículo 1, 7, 8, 162, 163 y



168 del Código del Trabajo, que debió aplicar, y mal empleados los artículo 3 y 4 de la ley 18.883, estatuto administrativo municipal, pues, insiste, su representado ejecutó sus servicios en una jornada laboral, de forma continua y permanente, sujetas a una jefatura, bajo órdenes e instrucciones, sujeta a estrictos controles y bajo la rendición de cuentas por sus servicios, y con una retribución mensual por los mismos, estas circunstancias no fueron consideradas suficientes por el sentenciador para efectos de declarar la relación laboral con la Municipalidad, y en ese sentido incurre en error de derecho el sentenciador al hacer aplicable el estatuto administrativo, tanto porque ello implicó prescindir de lo previsto en el artículo 7° del Código del Trabajo y reitera su transcripción de fallos de la Corte Suprema que acogen su tesis. Lo resuelto por el juez influye en lo dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido las infracciones denunciadas, esto es, si se hubiese aplicado correctamente la ley, el sentenciador hubiera concluido necesariamente que no se daban los requisitos del artículo 4° de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, entendiendo por tal que dicha relación era de carácter laboral, por lo que correspondía aplicar el Código del Trabajo, acogiendo en definitiva, la demanda de autos y dando lugar a las prestaciones solicitadas en el libelo.,

Termina solicitando tener por interpuesto recurso de nulidad y, en definitiva, se anule la sentencia, y dicte otra en su reemplazo, acogiendo en todas sus partes la demanda interpuesta por don Bastián Chacano Ortega en contra de la Ilustre Municipalidad de Pucón, declarando la existencia de una relación laboral desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, que se declare la procedencia del despido injustificado, que procede se declare la nulidad del despido y que conceda las indemnizaciones y prestaciones correspondientes, de aviso previo por \$630.000.-, de años de servicio por \$630.000.-, recargos por \$315.000.-, feriado legal y proporcional equivalentes a \$441.000.- y \$105.000.- respectivamente, ordene el pago de las



cotizaciones previsionales y seguridad social del demandante, aplicando la sanción de los artículos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo; todo lo anterior aplicando los reajustes e intereses pertinentes y con expresa condena en costa.

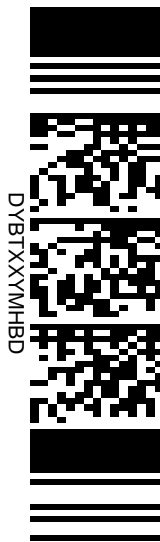
En la vista del recurso verificada en la audiencia del día 24 de junio en curso compareció por la parte recurrente la abogada señorita Mariana Cid, quien sostuvo su arbitrio recursivo, causales de nulidad, fundamentos y peticiones concretas; y, por la parte recurrida, alegó la abogada señora Bhama Zúñiga, solicitando su rechazo, por cuanto el sentenciador, al dictar la sentencia, no ha incurrido en las causales invocadas, las que además resulta ser improcedentes, por cuanto por ellas, no se pueden alterar las conclusiones fácticas de sentenciador en las cuales precisamente estableció que la relación jurídica que unía las partes era a honorarios, dado que ella se encuadraba en el artículo 4 de la ley 18. 883, Estatuto Administrativo laboral, que excluye la aplicación del Código del Trabajo.

Finalizada la vista la causa quedó en acuerdo, logrado este, se procede a redactar la presente sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurrente interpuso recurso de nulidad, basado en la causal del literal c) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es: “Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, como principal; y, en subsidio, la causal del artículo 477 del mismo Código, por haberse incurrido, en la dictación de la sentencia “en infracción de las leyes que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, las que sustenten en los hechos y fundamentos normativos referidos en lo expositivo.

Segundo: Que la abogada de la recurrida, al alegar en estrados solicitó su rechazo, por cuanto el sentenciador, al dictar la sentencia, no incurrió en las causales invocadas, las que además resultan ser improcedentes, por cuanto por ellas, no se pueden alterar las



conclusiones fácticas de sentenciador en las cuales precisamente estableció que la relación jurídica que unía las partes era a honorarios, dado que ella se encuadraba en el artículo 4 de la ley 18. 883, Estatuto Administrativo laboral, que excluye la aplicación del Código del Trabajo.

Tercero: que la doctrina y la jurisprudencia ha precisado que la calificación jurídica designa la operación lógica consistente en verificar si y en qué medida la situación de hecho concreta corresponde al supuesto legal, en el cual se asume que debe de entrar y de encontrar los lineamientos para su tratamiento jurídico posterior. Calamandrei, citado por don Omar Astudillo Contreras en su libro el Recurso de Nulidad Laboral, algunas consideraciones técnicas, página 132, sindicla la calificación jurídica como integrante del silogismo, capaz de comportar un error in indicando, cuando se traduce en un error en la selección de los hechos de relevancia jurídica que deban servir para que el caso “entre” en la regulación normativa. La describe como “una operación mental preparatoria y precedente a la de aplicación del derecho”, haciendo la salvedad que en la práctica se confunde (se fusiona) con la aplicación de la ley porque al escoger el material de hecho el juez ya tiene presente el hecho específico que la norma jurídica considera como correspondiente al caso” en este sentido se ha explicado que la calificación de los hechos y de los actos jurídicos consiste en identificar una situación de hecho con una noción legal, determinar en qué categoría jurídica entre el nexo o el acto cuya existencia ha sido comprobada y, por consiguiente, apreciar que regla legal le es aplicable. Sostiene don Omar Astudillo en la obra citada, página135, que con la calificación jurídica propiamente dicha se pretende designar la labor de identificación de la naturaleza jurídica de los hechos probados, esto es, la definición de su esencia y propiedades características, actividad que tendrá que ejecutarse conforme a la relación o correspondencia que pueden tener esos hechos con la previsión legal respectiva. Por lo tanto, esto trae consigo que el juez



deberá ubicar la norma legal que sea la pertinente al caso, dentro de aquellas que el ordenamiento jurídico franquea para la solución del asunto, en función de ello, tendrá también que seleccionar el material de hecho que resulte pertinente o relevante para ese fin.

Cuarto: Que, conforme con lo que se lleva dicho, cuando se hacen valer las causales invocadas por el recurrente, no es factible cuestionar la efectividad de los hechos dados por establecidos por el juez en la sentencia, estos resultan inamovibles por estos motivos de impugnación, así, lo que se debe determinar es el entendimiento que ha hecho el sentenciador de la norma legal del artículo 4 de la ley 18.883 a la subsunción y al modo en que ella fue aplicado al caso concreto.

En este sentido, se debe consignar que el juez de base, en los considerando DECIMO CUARTO AL DECIMO OCTAVO, en base al análisis de toda la prueba aportada, incluida la confesión del actor, conforme a la norma del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo, al no haber comparecido, análisis probatorio que no ha sido cuestionado, concluyó que las labores para las que fue contratado el actor bajo la modalidad a honorarios, eran accidentales a la función municipal. En efecto, expresó: *“Como ha quedado establecido en esta sentencia, la demandada encargó a la demandante un cometido específico, esto es, la prestación de servicios en calidad de psicólogo del programa Centro Diurno Comunitario amigable, activo y saludable de Pucón, de modo que encajan justamente en los requisitos del artículo 4 de la ley 18.883.”*

“Por tanto, la relación contractual entre las partes en juicio estaba amparada por la norma del artículo 11° de la Ley N° 18.834, esto es, por un contrato a honorario, circunstancia que respondió a la voluntad y consentimiento de ambas, conforme ya se relacionó en esta sentencia.”

“Efectivamente, con el análisis y ponderación de la prueba, efectuada, se logra la convicción que la demandante

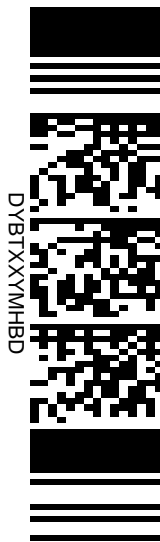


asumió una labor específica para la demandada, y consecuentemente las partes quedaron sujetas a la norma transcrita, suscribiendo los respectivos contratos a honorarios, cuya existencia, y servicios específicos, reconoce la actora como fundamento de su pretensión.”

“Los contratos se redactaron y acordaron por las partes, con los derechos, obligaciones, alcances y efectos, aceptados por ambas, y al respecto no cabe hacer cuestionamiento alguno, según se ha determinado en este fallo.”

Quinto: Que por lo referido, no observando esta Corte que en el caso concreto el sentenciador incurriera en una infracción de ley o calificara mal jurídicamente los hechos, el recurso no podrá prosperar, recordando que ha sido la propia Corte Suprema la que ha dicho, en los mismos fallos citados por el recurrente “que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en la especie, una Municipalidad, **en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente**”(destacado del redactor) Causa Rol N° 11.548-2014. A contrario sensu, si se encuadran en ellas, como estableció el sentenciador quedan reguladas por el propio contrato y en subsidio por las normas del estatuto municipal.

Sexto: Que finalmente, cabe también recordar, que esta Corte, atendida la naturaleza de derecho estricto del recurso de nulidad y el principio de inmediación que sustenta el procedimiento laboral, no puede entrar a revisar la ponderación de la prueba y, aunque los



argumentos pudieron ser entregados de una manera diversa a la querida por la recurrente, ello no es motivo para acoger una impugnación de derecho estricto, sino que sólo lo son por los errores alegados por las causales precisas habidos en la sentencia recurrida, de modo que si ello no acontece, como se dijo en el considerando anterior, el recurso no puede prosperar, pues a la Corte le está vedada una revisión del fallo, en los términos de un recurso de apelación.

Por lo expuesto, las causales de nulidad alegadas no serán acogidas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra c) del Código del Trabajo, se declara que **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandante representada por su abogado Sr. MAURICIO ORTEGA BERRÍOS en contra de sentencia de fecha 7 de febrero de 2022 dictada por don FRANCISCO MADRID ALARCÓN, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en el expediente laboral RIT 0-28-2021, RUC 21-4-0360953-3, la que, en consecuencia, NO ES NULA.

Redacción del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala.

Regístrese e incorpórese en su oportunidad en la carpeta digital.

Rol Corte Reforma Laboral N°3-2022. (sac)



Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Carlos Ivan Gutierrez Z., Ministra Suplente Viviana Loreto Ibarra M. y Abogado Integrante sr. Roberto Contreras E., se previene que el Abogado Integrante sr. Contreras no firma, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente. Temuco, treinta de junio de dos mil veintidós.

En Temuco, a treinta de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

